Informe 28/00, de 30 de octubre de 2000. "Posibilidad de contratar por parte del Ayuntamiento los servicios de actividades deportivas y monitores deportivos, con una cooperativa de trabajo asociado, siendo uno de los socios de dicha cooperativa concejal del Ayuntamiento".

ANTECEDENTES.

Por el Alcalde del Ayuntamiento de Loja (Granada) se dirige a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa el siguiente escrito:

"Por el presente elevo consulta a esta Junta sobre la posibilidad de contratar por parte de este Excmo. Ayuntamiento los servicios de actividades deportivas, con una Cooperativa de Trabajo Asociado formada por cuatro socios uno de los cuales es una Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, actualmente en la oposición y por tanto, no liberada y sin ostentar delegación alguna.

Dicha Concejala ostenta el cargo de secretaria y participa con acciones por valor de 300.000 de un capital social de 1.500.000 ptas., teniendo todos los socios la misma participación ".

CONSIDERACIONES.

Vuelve a plantearse ante esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa el tema de la incompatibilidad de Alcaldes y Concejales para contratar con los Ayuntamientos que es uno de los que con más frecuencia viene suscitándose últimamente y que obliga a esta Junta a remitirse a criterios ya expuestos con carácter reiterado en anteriores informes (como más recientes los de 21 de diciembre de 1999 (expediente 52/99) y de 6 de julio de 2000 (expediente 21/00) y los que en los mismos se citan.

En definitiva, en tales criterios se determina que la incompatibilidad de Alcaldes y Concejales viene establecida en el artículo 20, apartado e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Texto Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y que por remisión al artículo 178 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio de Régimen Electoral General, existe, respecto de los Alcaldes y Concejales para los contratos cuya financiación, total o parcial, corra a cargo de la Corporación municipal o de

establecimientos de ella dependientes, habiéndose sostenido, por otra parte, que la disposición derogatoria única de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ha derogado de manera expresa el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 9 de enero de 1953, por lo que, a partir de la entrada en vigor de la Ley, cualquiera que fuese la opinión que se sustentase sobre la subsistencia anterior de su artículo 5 que establecía una serie de incompatibilidades para ser contratista de obras y servicios, debe considerarse expresamente derogado sin que pueda ya surtir efectos en orden a la apreciación de las causas de incompatibilidad en dicho artículo establecidas, en particular la de su apartado 4 que consideraba incompatibles para ser contratistas de obras y servicios públicos a las sociedades en las que el concejal, entre otras personas que mencionaba, tuviese al ser nombrado o adquiriese posteriormente más del 10 por 100 de los títulos representativos del capital social o una participación equivalente en sus beneficios u ostentase en ellas algún cargo directivo".

Debe advertirse, sin embargo, que el artículo 20, e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas extiende la incompatibilidad a las personas físicas y a los administradores de personas jurídicas, por lo que, en este último supuesto, también procederá apreciar la incompatibilidad que determina la prohibición de contratar.

CONCLUSIÓN.

Por lo expuesto, aplicando criterios ya reiterados, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende que no existe incompatibilidad para contratar con una cooperativa de trabajo asociado, aunque de la misma forme parte, como secretaria, una concejal y participe en su capital social con acciones, salvo que la misma tenga la consideración de administradora de la sociedad cooperativa.